

Naciones Unidas ASAMBLEA GENERAL

DECIMO PERIODO DE SESIONES
Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 461a.
SESION

Martes 22 de noviembre de 1955,
a las 11 horas

Nueva York

S U M A R I O

	Página
Tema 53 del programa:	
Cuestión de la continuación en funciones del Tribunal de las Naciones Unidas en Libia: informe del Secretario General (<i>continuación</i>)	93
Tema 52 del programa:	
Procedimiento arbitral: observaciones de los gobiernos sobre el proyecto de procedimiento arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional	93

Presidente: Sr. Manfred LACHS (Polonia).

TEMA 53 DEL PROGRAMA

Cuestión de la continuación en funciones del Tribunal de las Naciones Unidas en Libia: informe del Secretario General (A/2983, A/C.6/L.348, A/C.6/L.352, A/C.6/L.354, A/C.6/L.362) (*continuación*)

DEBATE GENERAL (*continuación*)

1. El Sr. FEKINI (Reino Unido de Libia) quiere afirmar una vez más que el joven Estado soberano de Libia ansía que sus relaciones con todas las naciones pacíficas, y en particular con Italia, se guíen por un espíritu de amistad y entendimiento mutuos. Libia, que desde la proclamación de la independencia ha solicitado su admisión en las Naciones Unidas, ha asumido ya el compromiso formal de respetar todas las obligaciones de la Carta, y, animada por este espíritu, se declara totalmente dispuesta a someter los conflictos jurídicos en que pudiera ser parte a la Corte Internacional de Justicia, estimando que la competencia de ésta debe ser debidamente respetada y afianzada. Al proceder así, Libia tiene la intención de servir el interés común y crear un ambiente propicio para la rápida concertación con Italia de los acuerdos previstos.

2. El representante de Italia declaró en la 460a. sesión que sería conveniente llegar a una transacción aceptable para las dos Partes y expresó el deseo de que siga existiendo una garantía judicial mientras quede pendiente la concertación de los acuerdos proyectados.

3. El representante de Libia encomia el espíritu de conciliación que demuestra el Gobierno italiano. A su juicio son posibles dos soluciones, y ambas tienen en cuenta, por una parte, el deseo del Gobierno italiano, y, por la otra, el firme convencimiento del Gobierno de Libia de que es inminente la concertación de los acuerdos y que es poco probable que se susciten entre las Partes otros conflictos jurídicos.

4. La primera solución sería la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia. La segunda se encontraría en cualquier otro medio de solución paci-

fica previsto por la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el arbitraje a expensas de las Partes. Para aumentar las garantías que ofrece este procedimiento, el compromiso eventual podría atribuir al tribunal de arbitraje que se constituya el mismo mandato y la misma competencia previstos en el artículo 10 de la resolución 388 A (V) de la Asamblea General.

5. Es innecesario decir que el Gobierno de Libia sólo aceptaría una u otra de esas soluciones si por ellas se pudiese reemplazar de inmediato el Tribunal de las Naciones Unidas. Convendría también fijar un plazo, que podría ser hasta el 30 de junio de 1956, para presentar las cuestiones en litigio. Pero el Gobierno de Libia, aunque lo considera esencial para la solución definitiva de toda la situación, estaría dispuesto a renunciar a ese plazo en caso necesario.

6. La adopción de una de las dos soluciones expuestas permitiría eliminar el último obstáculo que podría oponerse a la completa normalización de las relaciones entre Libia e Italia.

7. El Sr. CASARDI (Italia) declara que el Gobierno italiano estudia actualmente, animado por un sincero deseo de cooperación, la segunda solución propuesta por el representante de Libia. El Sr. Casardi quiere declarar desde ahora que no considera conveniente fijar un plazo para la presentación de los litigios y agrega que espera recibir de un momento a otro instrucciones definitivas de su Gobierno.

8. El PRESIDENTE, al comprobar que es posible la conclusión de un acuerdo directo entre Italia y Libia, propone suspender el examen del tema 53 del programa hasta el momento en que el observador de Italia pueda dar a conocer la opinión de su Gobierno.

Así queda acordado.

El Sr. Casardi, observador de Italia, y el Sr. Fekini, observador del Reino Unido de Libia, se retiran.

TEMA 52 DEL PROGRAMA

Procedimiento arbitral: observaciones de los gobiernos sobre el proyecto de procedimiento arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional (A/2456, párr. 57, A/2899/Corr.1, y A/2899/Add.1 y 2, A/CN.4/92)*

DEBATE GENERAL

9. El PRESIDENTE resume los antecedentes del examen de la cuestión de procedimiento arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional, por la Sexta Comisión y por algunos gobiernos, y propone abrir el debate general de toda la cuestión.

* Documento no publicado en español hasta la fecha.

10. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) enumera los documentos de que la Comisión tiene conocimiento y señala sus principales características.

11. A juicio del Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela), la Comisión no debería dedicar mucho tiempo a esta cuestión porque los únicos elementos nuevos son las observaciones presentadas por algunos gobiernos después del estudio a fondo realizado por la Comisión en el octavo período de sesiones de la Asamblea General.

12. Casi todos los artículos del proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional fueron criticados en el curso de los debates de 1953. Se sostuvo entonces, entre otras cosas, que el proyecto confundió las nociones de arbitraje y justicia internacional; que además destruyó el principio de flexibilidad del procedimiento de arbitraje y que atentó contra la soberanía de los Estados. Estas objeciones, o algunas de ellas, aparecen por otra parte en el párrafo 28 del informe de la Comisión de Derecho Internacional en su quinto período de sesiones (A/2456) y en las observaciones de los gobiernos.

13. Es evidente entonces, que el texto actual del proyecto requiere grandes modificaciones. Mas cabe preguntarse si será útil proceder a una revisión tan amplia, que inevitablemente significará un retorno al concepto clásico, a la aplicación de normas perfectamente conocidas.

14. En el párrafo 18 de su informe (A/2456), la Comisión de Derecho Internacional reconoce que, a ciertos respectos, ha excedido el ámbito del derecho actualmente vigente. Tal vez sea loable el intento de modernizar el procedimiento arbitral; pero hay que preguntarse ante todo hasta dónde están dispuestos a ir los Estados por este camino.

15. La delegación de Venezuela no puede aceptar el proyecto en su forma actual. Aun sin tomar en cuenta las críticas ya formuladas, le reprocha que guarde silencio sobre algunas cuestiones muy importantes, especialmente sobre la influencia que tendría su aprobación sobre las obligaciones existentes, como las asumidas por los Estados Americanos, y sobre la admisibilidad de las reservas. El Sr. Pérez Perozo recuerda a este respecto que durante el octavo período de sesiones el Sr. J.P.A. François, en aquel entonces Presidente de la Comisión de Derecho Internacional, declaró en la Sexta Comisión (387a. sesión) que las reservas no debían ser admisibles.

16. Al examinar las soluciones de procedimiento entre las cuales podría optar la Comisión, el representante de Venezuela descarta varias, como la del examen detallado por la Comisión de los artículos del proyecto, por ser demasiado complicada y larga; la de una nueva remisión a la Comisión de Derecho Internacional porque estima que ésta ha dicho ya su última palabra sobre la cuestión; la de la convocación de una conferencia de plenipotenciarios, en vista del escaso interés manifestado por los gobiernos y porque sería necesario consultarlos previamente sobre la oportunidad de tal convocatoria; la de la constitución de un comité especial, porque los debates del comité sólo repetirían lo que ya se ha hecho.

17. Por último, hay otro procedimiento por el cual su delegación posiblemente se inclinaría llegado el caso: la Asamblea General tomaría nota del proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional,

con reconocimiento por el trabajo realizado, como un paso importante para hacer más eficaz el procedimiento del arbitraje. A la vez, la Asamblea remitiría a los Estados el proyecto con las observaciones de los gobiernos y las actas de los debates en esta Comisión, para que ellos seleccionaran del texto las disposiciones que juzgaran convenientes y las utilizaran como modelo en la concertación de convenios de arbitraje. Quedaría así, pues, el proyecto como un trabajo valioso digno de tomarse en cuenta en una etapa más avanzada de la colaboración internacional; es más, podría ser de utilidad, en la forma indicada, para los Estados que estén de acuerdo con su contenido, total y parcialmente.

18. El Sr. ROBINSON (Israel) recuerda que en el octavo período de sesiones de la Asamblea General la Sexta Comisión había examinado un proyecto de convención sobre el procedimiento arbitral y decidido someterlo a los gobiernos para que pudieran presentar nuevamente sus observaciones. Hasta este momento, 17 gobiernos han presentado observaciones por escrito (A/2456, anexo I y A/2899 y Add. 1 y 2). En el curso de los debates celebrados en la Sexta Comisión en 1953, 31 delegaciones expusieron su opinión sobre el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Sólo muy pocas delegaciones se pronunciaron a favor o en contra del proyecto; pero en general los representantes demostraron escaso entusiasmo por el proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional.

19. Un análisis minucioso de las observaciones presentadas por escrito o verbalmente permite dividir a los Estados Miembros en cuatro grupos, conforme a la actitud adoptada respecto del proyecto.

20. Ante todo figura el pequeño grupo de Estados que están dispuestos a aceptar el texto casi como ha sido presentado. El segundo grupo abarca los Estados dispuestos a aceptar el proyecto siempre que se introduzcan algunas modificaciones de forma, pero sin que se alteren los principios esenciales. Se han propuesto 40 enmiendas en este sentido.

21. Los Estados que se pueden clasificar en el tercer grupo aceptan los principios fundamentales del proyecto, pero querrían limitar su aplicación *ratione personae* a las diferencias entre Estados y *ratione materiae* a las controversias que puedan ser sometidas a juicio. Algunos Estados opinan que deberían excluirse expresamente los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados y que el compromiso de arbitraje debe ser facultativo y referirse únicamente a controversias eventuales. El Relator especial y la Comisión de Derecho Internacional pretendían, en cambio, dar al proyecto efecto retroactivo, por analogía sin duda con la práctica de la retroactividad de las leyes procesales en el derecho interno. También se puede incluir en este grupo a los Estados que aceptan el proyecto en sus líneas generales, pero vacilan en admitir que la sentencia no sea definitiva, o que, a pesar de aceptar que la Corte Internacional reemplace, en caso necesario, la autonomía de la voluntad de las Partes, no pueden admitir que decida sobre el fondo de la cuestión.

22. Antes de poder convertirse en convenio, el proyecto actual debería ser completado con un preámbulo y cláusulas finales. Sobre este último punto convendría tener muy especialmente en cuenta la cuestión de las reservas, las declaraciones hechas por los Esta-

dos no miembros conforme a la resolución del Consejo de Seguridad del 15 de octubre de 1946,¹ las relaciones del proyecto actual con los tratados bilaterales o multilaterales de arbitraje internacional, y la cláusula de reciprocidad.

23. Los Estados que pueden agruparse en el cuarto grupo se oponen a los principios mismos sobre los que se basa el proyecto; estos Estados no pueden admitir, en particular, que se elimine en realidad la autonomía de voluntad de las Partes y que se confíen a la Corte Internacional de Justicia o a su Presidente, atribuciones de alcance tan amplio.

24. Antes de pronunciarse sobre el destino del proyecto, la Sexta Comisión deberá examinar dos cuestiones de fondo. La primera se refiere a la naturaleza misma del proyecto. Se ha alegado que el nuevo proyecto de convención es un instrumento que no permite ninguna escapatoria, lo que significa que en caso de ser aceptado resultaría imposible sustraerse a la obligación de recurrir al arbitraje, como ocurrió en el caso de los optantes húngaros en el decenio posterior a 1930, o en el caso de los derechos humanos al aplicarse los Tratados de Paz de 1945. Este argumento sólo parcialmente tiene en cuenta que el proyecto confiere al tribunal arbitral facultades más amplias. El representante de Israel menciona a este respecto las disposiciones de los artículos 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16 y 23 que han sido incluídas, a ese efecto, en el proyecto. La eficacia de esas disposiciones no es dudosa; pero el proyecto se caracteriza esencialmente porque reemplaza la autonomía de la voluntad de las Partes por decisiones adoptadas por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia o por la Corte misma, a los que se atribuyen funciones judiciales y extrajudiciales. Este proyecto sólo tendría plena eficacia si la Corte Internacional de Justicia o su Presidente se consideran formalmente obligados a aceptar la competencia que les atribuye el proyecto. Nada indica que se haya consultado a la Corte a este respecto, y es muy probable que no hubiera dado curso a una solicitud de esa índole.

25. El proyecto confiere a la Corte muchas atribuciones. La Corte puede, en ciertas condiciones, decidir a petición de una de las Partes si una controversia está o no está comprendida en la obligación de recurrir al arbitraje (párr. 1 del art. 2), y prescribir en su decisión medidas precautorias (párr. 2 del art. 2). La Corte puede pronunciarse sobre la recusación si se trata de un árbitro único, a petición de cualquiera de las Partes (párr. 2 del art. 8). Toda controversia respecto a la interpretación y el alcance del laudo dictado por el tribunal arbitral puede, en ciertos casos, ser sometido a la Corte a petición de una de las Partes (párr. 2 del art. 28). La demanda de revisión puede también ser planteada por una de las Partes ante la Corte, lo que supone que la Corte puede pronunciarse sobre el fondo (párr. 4 del art. 29). A petición de cualquiera de las Partes, la Corte sería competente para declarar la nulidad de un laudo y decidir que la demanda de nulidad tendrá efecto suspensivo (párr. 1, art. 31). Difícilmente se podría afirmar que la competencia así atribuída a la Corte corresponda con las disposiciones del Capítulo II de su Estatuto o que el procedimiento previsto en

el título II de su reglamento pueda aplicarse a los seis casos citados. El orador cita al respecto diversas disposiciones del Estatuto y del reglamento, y se pregunta si podrían aplicarse automáticamente a los artículos del proyecto. Será imposible afirmarlo hasta que la Corte no examine esas seis disposiciones del proyecto.

26. El representante de Israel recuerda por otra parte que, conforme a los términos del proyecto de convención, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia puede designar en ciertos casos los miembros del tribunal a solicitud de cualquiera de las Partes, imponer ciertas condiciones a la composición del tribunal arbitral y llenar una vacante si un árbitro se retira sin el consentimiento del tribunal. El uso quiere que se consulte al Presidente de la Corte cuando se trate de conferirle ciertas atribuciones en virtud de tratados internacionales, y nada indica que la Comisión de Derecho Internacional haya consultado a la Corte. Es bastante sorprendente que el proyecto no prevea el caso de que la Corte, o su Presidente, declaren que no puedan pronunciarse al respecto, o que les resulta imposible asumir funciones extrajudiciales, eventualidad prevista, por ejemplo, en los artículos XXXIV y XXXV del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá).

27. La Sexta Comisión deberá preguntarse en segundo lugar si el proyecto puede inducir a los países a someter sus controversias a un sistema de arbitraje internacional, como lo dice implícitamente el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas o como lo prescribe el párrafo 2 de la resolución 171 C (II) de la Asamblea General. Parece imposible llegar a una conclusión definitiva sobre este punto, pero no debe descartarse la posibilidad de que el proyecto produzca el resultado inverso. La Comisión de Derecho Internacional ha querido asegurar la eficacia de los procedimientos arbitrales; con la preocupación de lograr esta finalidad, no ha tenido en cuenta otras medidas, indudablemente menos radicales, pero que hubieran tenido mayor probabilidad de ser aplicadas.

28. Después de examinar estas dos cuestiones la Sexta Comisión podrá adoptar una decisión con entero conocimiento de causa. A juzgar por el número de observaciones presentadas con motivo de la segunda consulta sería absolutamente inútil consultar a los gobiernos por tercera vez. Tampoco conviene que la Sexta Comisión examine el proyecto de convención artículo por artículo, pues la experiencia ha demostrado que el método es largo y puede ser peligroso.

29. La delegación de Israel lamenta no poder apoyar la recomendación de la Comisión de Derecho Internacional de su quinto período de sesiones, a saber que la Asamblea General recomiende el proyecto a los Estados Miembros a fin de que concluyan una convención sobre procedimiento arbitral (A/2456, párr. 55). Los Estados no querrán comprometerse de antemano a aplicar este procedimiento arbitral, siempre que se instituya un sistema de arbitraje con el fin de resolver una controversia entre dos Estados, sin conocer la naturaleza o el alcance de la controversia o la identidad de la otra Parte. A este respecto es muy significativo que sólo cuatro Estados hayan ratificado el Acta General para la solución pacífica de las diferencias internacionales, revisada en 1949. Conviene también recordar que la Comisión de Derecho Internacional en su quinto período de sesiones,

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo período de sesiones, Suplemento No. 2*, párrs. 1225 y siguientes.

no pudo aprobar el proyecto por unanimidad; en el quinto período de sesiones de la Comisión, dos de sus miembros votaron en contra del proyecto en su totalidad, y un tercero en contra de algunas partes del texto. Es indudable que en caso de ser sometido a los gobiernos para su aprobación, todo el proyecto o alguna de sus disposiciones serán objeto de muchas críticas. En vez de un texto homogéneo que podrían utilizar cuando tuvieran que asumir ciertas obligaciones de someterse a arbitraje, impuestas por un sistema de acuerdos bilaterales o regionales, el sistema de la convención sólo daría a los gobiernos un texto heterogéneo que no presentaría ni siquiera la ventaja de contar con la aceptación general.

30. Parece también que sería inoportuno convocar a una conferencia internacional para la aprobación de la convención; por otra parte, si la Asamblea General aprueba el proyecto por escasa mayoría, su resolución contribuiría a restarle valor.

31. En cambio, sería conveniente devolver el proyecto a la Comisión de Derecho Internacional porque ésta, inspirándose en los debates de la Sexta Comisión y las enmiendas propuestas, podría introducirle algunas mejoras.

32. También habría que pedir a la Secretaría que preparase un comentario distinto del que ha sometido a la Asamblea General (A/CN.4/92)*. En este último se resumen los antecedentes históricos de cada uno de los artículos sobre la base de las tentativas anteriores de codificación del procedimiento arbitral y se justifican las innovaciones de la Comisión de Derecho Internacional. El valor del documento es indiscutible; pero apenas se le puede considerar como una exposición de motivos de la versión definitiva adoptada por la Comisión de Derecho Internacional. En el nuevo comentario la Secretaría debería conceder particular atención a las objeciones formuladas por los gobiernos o sus representantes sobre tal o cual artículo, así como las razones que movieron a la Comisión de Derecho Internacional a conservar el texto anterior o a reemplazarlo por uno nuevo. Cada uno de los artículos ha sido examinado no menos de cuatro veces, ya sea en el primero (A/CN.4/18) o el segundo (A/CN.4/46) informe del Profesor G. Scelle, en el primer proyecto presentado a la Asamblea General en su séptimo período de sesiones (A/2163, párr. 24) o en el segundo proyecto presentado a la Asamblea General, en su octavo período de sesiones (A/2456, párr. 57). La Secretaría podría tratar que la exposición de los principios sobre los que se basa el proyecto precediera a este comentario artículo por artículo. A este respecto resultaría particularmente útil que el comentario incluyera una bibliografía selecta sobre las cuestiones particulares que suscita el examen de cada artículo. Al final del volumen debería figurar también un índice. Este nuevo comentario, una vez impreso, constituiría un instrumento de trabajo valiosísimo para las cancillerías, los juristas y otros interesados. Al concluir esta obra la Comisión de Derecho Internacional y la Secretaría podrían tener la seguridad de haber prestado un servicio útil a la causa del derecho internacional y su codificación.

33. El Sr. CARPIO (Filipinas) plantea una cuestión de orden y pone de relieve la importancia de la declaración del representante de Israel. La Sexta Comisión podrá resolver satisfactoriamente el pro-

blema sólo después de examinar atentamente todas las cuestiones planteadas en esa brillante exposición de la situación. Por consiguiente, sería útil que los miembros de la Comisión dispusieran del texto exacto del discurso del representante de Israel. El representante de Filipinas pregunta a la Secretaría si sería posible distribuir el discurso en una sesión próxima.

34. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) indica que la Secretaría no podría hacerlo sin apartarse del procedimiento habitual.

35. El Sr. ROBINSON (Israel) declara que hará mimeografiar su declaración para satisfacer al representante de Filipinas.

36. El Sr. TAMMES (Países Bajos) hace algunas observaciones preliminares sobre la decisión que deberá adoptar la Sexta Comisión respecto del proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional. Se trata de una cuestión previa, porque si la Sexta Comisión decide considerar ese texto como un modelo y no como un proyecto de convención al que deberán conformarse obligatoriamente las Partes, ya no serán urgentes algunas cuestiones contenciosas, como las planteadas por las cláusulas finales y la distinción entre las disposiciones obligatorias y facultativas.

37. A juicio de la delegación de los Países Bajos, la Comisión debería tratar de que se aceptara el proyecto de convención como un modelo de procedimiento arbitral. La Asamblea General podría recomendar a los Estados Miembros que siguieran el procedimiento previsto en el proyecto cuando concertaran acuerdos bilaterales o multilaterales especiales o generales. El Gobierno de los Países Bajos expuso detalladamente en sus observaciones escritas (A/2899/Add.1) las razones que militan en favor de esta solución; pero el Sr. Tammes quiere presentar al respecto otros argumentos complementarios.

38. Algunos gobiernos han reprochado a la Comisión de Derecho Internacional por tratar de lograr a cualquier costo la perfección. Estiman que ni el estado actual de desarrollo del derecho internacional ni la práctica del arbitraje internacional justifican esta ambición. Hay quienes prefieren el concepto tradicional de arbitraje al concepto del arbitraje jurisdiccional que, sin embargo, está muy lejos de ser un concepto nuevo. Por estas razones, si el proyecto debiera servir de convención, se le añadirían tantas reservas que se desvirtuaría el objetivo perseguido en todo momento por la Comisión de Derecho Internacional. En ese caso, es preferible conservar el texto original completo, con las pocas mejoras que se le puedan introducir en virtud de las observaciones de los gobiernos y del debate actual. Dicho texto tendría entonces una influencia feliz sobre el desarrollo de los medios de resolver pacíficamente las controversias internacionales.

39. En los últimos años la cuestión del procedimiento arbitral ha sido objeto de profundos estudios por parte de la Comisión de Derecho Internacional, la Secretaría (que preparó un excelente comentario), los gobiernos y, finalmente, los juristas. Los artículos sobre el procedimiento arbitral han sido sometidos, pues, a un largo y laborioso proceso de elaboración y han llegado casi a la etapa en que podrían servir de modelo en materia de arbitraje. Lo mejor que puede hacerse, por consiguiente, es pedir a la Comisión de Derecho Internacional que examine nuevamente el proyecto de convención teniendo presentes

* Este documento no ha sido publicado en español hasta la fecha.

las observaciones de los gobiernos y los debates en la Sexta Comisión. Puede asegurarse que, en esas condiciones, la forma definitiva del proyecto de convención ejercerá influencia duradera y provechosa sobre el desarrollo del procedimiento arbitral.

40. A juicio de la delegación de los Países Bajos el proyecto sólo tendrá este efecto saludable si conserva sus características originales. En su informe del cuarto período de sesiones, la Comisión de Derecho Internacional ya distinguía entre el tipo clásico de arbitraje y el arbitraje como procedimiento judicial que ha prevalecido en el proyecto presentado. La posición adoptada finalmente por la Comisión de Derecho Internacional en esta materia es fruto de largos trabajos; por consiguiente, es menester preservarla. Si la Comisión sólo se hubiera ocupado en el arbitraje tradicional, su obra habría sido de pura codificación. Ahora bien, la práctica del arbitraje internacional, tal como se desprende de muchísimos compromisos, de las cláusulas de compromiso arbitral o de los tratados de arbitraje, es muy poco uniforme, dada la naturaleza tan diversa de las necesidades que han de resolverse en los distintos casos particulares. Son raros los principios generales como el codificado por la Comisión de Derecho Internacional en el artículo 11 del proyecto de convención. La verdadera función de la Comisión de Derecho Internacional en este aspecto tan técnico de la evolución del derecho internacional, consiste en llenar los vacíos que se han advertido en el curso de la historia del arbitraje. Corresponderá a los Estados, más adelante, sacar partido de las soluciones que ofrece el texto establecido por la Comisión de Derecho Internacional.

41. Dos tipos de obstáculos han impedido a veces que surta el efecto la obligación de someterse a arbitraje: primero, las Partes, debido a ciertas dificultades, no siempre han podido llevar hasta el fin el procedimiento emprendido; segundo, existía siempre el temor de que una de las Partes se negara a reconocer la sentencia arbitral por motivos de los que se consideraba único juez. A este respecto podría resultar muy valioso el concurso de la Corte Internacional de Justicia. Los temores de algunos gobiernos a este respecto no se justifican porque las funciones de la Corte serían muy limitadas y no quitarían su carácter propio a la sentencia arbitral. La Corte desempeñaría el papel de agente catalizador y no adoptaría decisión alguna sobre el fondo de la controversia. Para mejor precisar la índole de las atribuciones de la Corte, el Gobierno de los Países Bajos propuso la enmienda al párrafo 1 del artículo 2 (A/2829/Add.1 segunda parte) y que se refiere a la decisión preliminar de la Corte sobre la existencia de una controversia o sobre la obligación de someterla a arbitraje, decisión que sólo tiene por objeto resolver las dificultades iniciales del procedimiento. La enmienda propuesta tiende a precisar que esta decisión de la Corte no projuzga sobre la facultad de los árbitros de fijar su propia competencia en virtud del artículo 11, ni sobre la

facultad de la Corte de decidir, en virtud del artículo 31, que esos árbitros han asumido ilegalmente esa competencia.

42. Por lo tanto, la Corte Internacional de Justicia no desempeñaría en modo alguno el papel que de ordinario se atribuye a una corte de apelación, porque no tendría que examinar de nuevo todos los aspectos jurídicos de la cuestión. La Corte sólo entendería en las causas de impugnación enumeradas en el artículo 30 del proyecto de convención, y los casos previstos en ese artículo son muy raros. Por consiguiente, el papel de la Corte en materia de procedimiento arbitral sería secundario desde todo punto de vista. Su concurso ayudaría, sin embargo, a hacer efectivo el compromiso de someterse a arbitraje, conforme a la voluntad inicial de las Partes. Además, si la Corte declarase la nulidad de una sentencia arbitral, se sometería el litigio a un nuevo tribunal de arbitraje. Por estas razones, la delegación de los Países Bajos estima que los principios de eficiencia y continuidad que trata de hacer efectivos el actual proyecto de convención, en nada atentan contra la verdadera naturaleza del arbitraje.

43. Sin embargo, algunos gobiernos han expresado el temor de que el principio de la eficiencia resulte perjudicial para el importante principio del carácter definitivo de la sentencia arbitral. Los Gobiernos del Reino Unido (A/2456, anexo I, sección 9) y el Canadá (A/2899, sección 4) especialmente, abrigan ciertas dudas sobre la oportunidad de los artículos 29 a 32 del proyecto de convención que tratan de la revisión y la nulidad de las sentencias. La delegación de los Países Bajos estima a este respecto que las Partes deben estar en libertad de decidir, si así lo desean, que se impondrá el principio del carácter definitivo de la sentencia. En sus propias observaciones acerca del proyecto de convención que figuran en su informe sobre su quinto período de sesiones (A/2456), la Comisión de Derecho Internacional no ha excluido esta posibilidad; y el problema tampoco se plantea si se considera el proyecto de convención simplemente como modelo.

44. Las mismas observaciones podrían aplicarse al papel auxiliar de la Corte en los casos de revisión debida al descubrimiento de un hecho hasta entonces ignorado. Ese principio de la revisión es generalmente aceptado después de los Convenios de La Haya y está previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en el Pacto de Bogotá (1948). El párrafo 4 del artículo 29 está destinado a poner en aplicación este principio. En sus observaciones al artículo 29 (A/2899/Add. 1, parte II) el Gobierno de los Países Bajos se limitó a proponer algunas mejoras de orden técnico sencillamente.

45. Tales son las observaciones preliminares que la delegación de los Países Bajos deseaba presentar a esta altura del debate.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

